**JUZGADO PRIMERO (1º) DE FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
DE BOGOTÁ, D.C.**

Catorce (14) de mayo de dos mil veintidós (2022)

**Ref.: ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS DE ÓSCAR MAURICIO VALENTÍN EN
CONTRA DE LOS JUZGADOS 35 Y 80 PENALES MUNICIPALES CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ, EL CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE
BOGOTÁ, EL CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN-CER, EL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC, LA ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA (2022-00009).**

Hora: 8:50 A.M.

Procede este Despacho a resolver la solicitud de hábeas corpus que elevó el señor ÓSCAR MAURICIO VALENTÍN.

ANTECEDENTES

El señor ÓSCAR MAURICIO VALENTÍN promovió acción de hábeas corpus, porque en audiencia celebrada el 20 de febrero de 2022 ante el Juzgado 80 Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá, se legalizó su captura, se le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y, finalmente, se le impuso medida de aseguramiento que se cumple en el Centro Especial de Reclusión, pero el 10 de mayo del presente año, se llevó a cabo otra vista pública ante el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Garantías de la misma ciudad, en la que se accedió a la solicitud de sustituir la medida de aseguramiento por *“la del lugar del domicilio”*, orden que no se había cumplido hasta el momento en el que se instauró el mecanismo constitucional ya indicado.

Notificado, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá, informó que se le asignó, por reparto, el conocimiento de la audiencia preliminar de sustitución de medida de aseguramiento de detención intramural por domiciliaria, respecto del procesado ÓSCAR MAURICIO VALENTÍN, oportunidad en la que, luego de valorar los elementos probatorios que se presentaron en la vista

**Ref.: ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS DE JHONN ALEXÁNDER REYES CONTRERAS EN CONTRA DEL
COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ-COMEB Y DEL JUZGADO 9º DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ (2022-00008).**

pública, se accedió a lo solicitado, para lo cual se suscribió el acta de compromiso y se libró la boleta de detención domiciliaria No. 31, todo con el fin de que la privación de la libertad se cumpliera, ya no en un establecimiento de reclusión, sino en la residencia del imputado. Señaló que una vez finalizada la audiencia preliminar y emitidos los oficios correspondientes, el estrado judicial perdió competencia para actuar en las aludidas diligencias, de modo que son el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC, los llamados a efectuar los trámites administrativos necesarios para cumplir la orden que dictó el despacho (archivo 00015).

Por su parte, la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, informó que es la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la competente para pronunciarse frente a la solicitud de hábeas corpus, motivo por el que remitió la actuación a ésta última (archivo 00005).

El Centro Especial de Reclusión-CER informó que el 22 de abril de 2022 ingresó el accionante, que la boleta de detención domiciliaria No. 31 que emitió el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá se recibió el 11 de mayo del mismo año y que, con el fin de materializar la orden judicial, se solicitó a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional que informara si la persona privada de la libertad tenía órdenes de captura vigentes o había sido requerido por otra autoridad judicial, y que a la Regional de la Zona Centro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC, se le requirió que otorgara un cupo y que esa institución, en cumplimiento a la normatividad que regula la materia, realice la vigilancia y el seguimiento a la medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención domiciliaria, petición ésta última a la que no se ha dado respuesta (archivo 00006).

Por su parte, el Juzgado 80 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá precisó que el 20 de febrero de 2022, se llevó a cabo la audiencia en la que se legalizó la captura, se imputó al investigado ÓSCAR MAURICIO VALENTÍN el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado y se le impuso, por solicitud del ente acusador, la medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, para lo cual se libró la boleta de detención No. 3, decisión contra la que se interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que, a la fecha, no habría sido resuelto.

De igual manera, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia señaló que la detención domiciliaria, a no dudarlo, es una medida de aseguramiento privativa de la libertad, conforme lo prevé el artículo 307 de la Ley 906 de 2004. Añadió que se trata de una situación en la que está limitada la libertad personal del procesado, solo que esa restricción se verifica en su lugar de residencia y no en un establecimiento de reclusión; por eso, no se puede decir que la prolongación de la medida intramural mientras se adelantan los trámites administrativos para que se concrete la detención domiciliaria, constituya una restricción ilegal de la libertad o una prolongación ilegítima de la misma (archivo 00010).

El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá manifestó, en síntesis, que lo relacionado con el otorgamiento de las libertades y los traslados de los encartados para el cumplimiento de las condenas o su movilización en casos de detenciones domiciliarias, no están a su cargo y que constituyen actuaciones meramente administrativas cuya gestión corresponde, exclusivamente, al establecimiento carcelario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC (archivo 00008).

Mediante auto de 13 de mayo de 2022 se vinculó a los Juzgados 28 y 62 Penales Municipales con Función de Control de Garantías y 1º Penal del Circuito con Función de Conocimiento, todos de Bogotá, a los Directores de las Cárceles La Modelo y La Picota, ambas de la Capital, y a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional.

Hasta el momento en el que se dicta la presente decisión, no se ha pronunciado otra de las entidades vinculadas.

CONSIDERACIONES

El suscrito Juez es competente para conocer del asunto de la referencia, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1095 de 2006.

La acción de hábeas corpus fue concebida por la Constitución Política, en su artículo 30, para la protección de la libertad cuando una persona ha sido privada ilegalmente de ella, garantía prevista en los tratados internacionales sobre derechos humanos y que fue reglamentada en la citada ley.

Ahora bien, dicha acción resulta viable tan solo frente a los ataques o intromisiones a la libertad individual que conlleven su limitación arbitraria, a favor de quien ha sido capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, como también en los eventos de prolongación ilegal de la privación de la libertad.

Sobre el particular, la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado doctor ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, ha sostenido lo siguiente:

“1.- Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas o especies constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts 28 C Pol., 2 y 297 L. 906/94), flagrancia (arts. 345 L. 600/00 y 301 L. 906/04), públicamente requerida (art. 348 L. 600/00) y administrativa (C-24 enero 27/94), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió -y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000.

“2.- Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley para que el servidor público i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisión que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del término, ordenar la libertad frente a captura ilegal -arts. 353 L. 600/00 y 302 L. 906/04- entre otras)” (Auto de 27 de noviembre de 2006, citado en decisión de 28 de enero de 2011, correspondiente al proceso No. 35739).

En el presente asunto, una vez revisadas las pruebas documentales obrantes en el dossier digital conformado hasta el momento, se advierte que en audiencia llevada a cabo el pasado 20 de febrero, el Juzgado 80 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, legalizó la captura del señor ÓSCAR MAURICIO VALENTÍN, a quien se le imputó el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado y, finalmente, se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, después de lo cual la defensa solicitó la sustitución de ésta última por la de detención preventiva en la

residencia del imputado, petición a la que accedió el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en audiencia realizada el día 10 de los cursantes.

Efectuado el anterior recuento procesal, se arriba a la conclusión de que existe orden emanada de autoridad judicial competente que justifica la restricción a la libertad que, actualmente, sufre el actor constitucional, en la medida en que está cobijado por una medida de aseguramiento de esa naturaleza, inicialmente bajo la modalidad de detención en establecimiento de reclusión y, ahora, en su lugar de residencia, lo que significa, sencillamente, que no hay visos de ilegalidad en la privación del señor ÓSCAR MAURICIO VALENTÍN, en la medida en que tales decisiones encuentran soporte en los numerales 1 y 2 del literal A) del artículo 307 de la Ley 906 de 2004.

Ahora bien, debe dejarse sentado que la circunstancia de que se ubique al procesado en su lugar de residencia, no significa, en modo alguno, que no exista una medida de aseguramiento privativa de la libertad, pues se trata, simplemente, del lugar en el que debe cumplirse la restricción de ésta última, de modo que como la acción de hábeas corpus se encamina a restablecer la libertad conculcada, ella no es el mecanismo adecuado para obtener el traslado del Centro Especial de Reclusión a la vivienda o morada que, en su momento, informó el imputado.

En otras palabras, dada la existencia de una medida de aseguramiento privativa de la libertad que fue tomada en el marco de una investigación penal, el accionante debe cumplirla, independientemente de que se lleve a cabo en una penitenciaría o en su propia residencia, pues, tanto en el primero como en el segundo de los escenarios mencionados, se hallará legítimamente privado de la libertad, de modo que la acción de hábeas corpus, por ese solo aspecto, se torna improcedente, pues la detención domiciliaria no consiste en otorgarle la libertad al investigado, sino en una forma de cumplimiento de la restricción a la libertad que le impuso el Juez competente para ello.

Si de lo que se trata es de una demora en la ejecución de la determinación que tomó el Juez de Garantías, ello es un asunto meramente administrativo y debe acudir, de ser el caso, al mecanismo adecuado para la protección del derecho fundamental que se esté vulnerando, pues esta es una circunstancia que no puede dilucidar el Juez de hábeas corpus.

En torno al tema tiene dicho la jurisprudencia:

“3. En el caso que se somete a la consideración de la Corte, se observa que el gestor de la queja se encuentra vinculado a una investigación penal adelantada, en la actualidad, por la Fiscalía Segunda Especializada, en desarrollo de la cual le fue impuesta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de domicilio, en audiencia que se llevó a cabo el 8 de julio de 2019.

“Luego, resulta claro que el procesado se encuentra privado de la libertad en virtud de la orden emitida por autoridad competente, es decir, que no se dispuso, en manera alguna, su libertad, único evento que habilitaría la intervención del Juez de hábeas corpus en el asunto por la prolongación ilícita de tal garantía.

“En otras palabras, la situación fáctica que aquí se plantea no constituye ninguno de los eventos en los que la ley y la jurisprudencia nacional autorizan la concesión de este excepcional mecanismo.

“Distinto es que no se haya materializado la sustitución del lugar donde deberá cumplir la medida, lo cual no constituye motivo alguno para acceder a ordenar su excarcelación por esta vía.

“4- Por lo discurrido hasta ahora, se concluye que deviene improcedente la concesión del hábeas corpus, de ahí que la determinación objeto de la censura será confirmada” (C.S.J., auto de 24 de julio de 2019, radicación AHC2947, M.P.: doctor ARIEL SALAZAR RAMÍREZ).

En todo caso, la documentación obrante en el plenario revela que el Centro Especial de reclusión, que es lugar en el que se encuentra retenido el promotor de la acción constitucional, está realizando los trámites tendientes a obtener su traslado al lugar de residencia previamente informado, para lo cual ya verificó, con ayuda de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, que el encartado no tiene órdenes de captura vigentes o ha sido requerido por otra autoridad judicial, y se está a la espera de que la Regional de la Zona Centro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC otorgue un cupo y realice, a continuación, la vigilancia y el seguimiento a la última medida de aseguramiento.

Se deja sentado, finalmente, que dada la claridad de la situación que aquí se analiza, no se consideró necesaria la entrevista con el interesado.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Juez,

R E S U E L V E

PRIMERO.- NEGAR la concesión del hábeas corpus solicitado por el señor **ÓSCAR MAURICIO VALENTÍN**.

SEGUNDO.- Por Secretaría, notifíquese este auto, **en forma inmediata y personalmente**, al señor **ÓSCAR MAURICIO VALENTÍN**, poniéndole de presente que puede impugnarlo dentro de los tres días siguientes a la comunicación efectiva del mismo. Inclúyase copia de esta providencia.

TERCERO.- Por Secretaría, notifíquese esta providencia, a través del medio más expedito que sea posible, a los **restantes sujetos procesales**; adjúnteseles copia de esta providencia.

CÓPIESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Ricardo Adolfo Pinzon Moreno

Juez

Juzgado Circuito De Ejecución

Sentencias 001 De Familia

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

d2a4e1941e35b5f9666954052ead80910a246d7f2402eadeda7b819ab93432c9

Documento generado en 14/05/2022 08:53:36 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente

URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>